



**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

**PROCESO: ORDINARIO LABORAL - SEGURIDAD SOCIAL.**

**DEMANDANTE: RODOLFO ANTONIO QUINTERO CANEDO.**

**DEMANDADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP.**

**RADICACIÓN: 08-001-31-05-013-2020-00117-00.**

**INFORME SECRETARIAL:**

Señor Juez, a su Despacho informándole que el proceso digitalizado de la referencia fue remitido por la Secretaría General de la Corte Constitucional el 13 de diciembre de 2.022 en el que se observa que la Sala Plena de la Corte Constitucional en providencia del 14 de septiembre de 2.022, dirimió el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Jurisdicción Ordinaria Laboral, en el sentido de asignar a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento del presente proceso a este Despacho Judicial, sin que a la fecha se halla proferido auto de obedecer y cumplir lo resuelto por el Superior. Así mismo, le comunico que la Secretaría del Juzgado, frente a la cual hubo cambio de secretario a mitad de febrero de este año, continúa en labores de organización y depuración de archivos con ocasión a la digitalización del Juzgado frente expediente anteriores a este pendiente por tramitar, labor en donde se encontró este proceso. Sírvese a proveer.

Barranquilla, 30 de junio de 2023.

MARIA B POTES SANTODOMINGO.  
Secretaria.

**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA.** Barranquilla, treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2.023).

Visto el informe secretarial que antecede y revisado el expediente, observa el Despacho que efectivamente se ha de obedecer y cumplir lo ordenado por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante auto del 14 de septiembre de 2.022 a través del cual le asignó la competencia a la Jurisdicción Ordinaria Laboral para conocer del presente asunto.

Pues bien, sea lo primero advertir que como la demanda de solicitud de medidas cautelares fue presentada ante los Juzgados Administrativos del Circuito de esta ciudad, **se hace necesario que la demanda, incluyendo las pretensiones y el poder sean adecuados al proceso Ordinario laboral de Primera Instancia ante la respectiva autoridad judicial**, demanda y poder que a su vez incluyen aspectos relacionados con la revocatoria de actos administrativos, los cuales deben excluirse de la demanda a fin de que lo pretendido pueda ser resuelto por esta especialidad, máxime cuando el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no existe en el ordenamiento laboral. De igual forma debe determinarse la clase de procedimiento por el cual se pretende tramitar la presente demanda, de tal forma que reúna los requisitos exigidos por el artículo 25 y 26 del C.P.T.S.S.

En ese orden de ideas, lo pretendido en el libelo incoatorio *“solo es aplicable en un proceso que se tramita ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”* como lo anotó la Corte Constitucional en el citado proveído, por lo que se insiste en la necesidad de que se reformulen las pretensiones conforme a lo antes indicado. Así mismo, es de advertir que las pretensiones de la demanda deben ser elaboradas de manera clara y precisa, sin ambigüedades, es decir, que no se presente duda en lo que se reclama. Con base a lo anterior, la parte demandante deberá corregir la demanda en aras de expresar y enumerar claramente cada una de sus pretensiones de forma individualizada, concreta, y precisa, identificando las declarativas, condenatorias y subsidiarias, si las hubiere, evitando incurrir en una indebida acumulación de pretensiones, conforme la normatividad procesal laboral precitada, especialmente con el numeral 6° del artículo 25 del CPTSS, que dispone: *“Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado”*.

De otro lado, observa el despacho como tercera falencia, que se pretendería iniciar entonces el trámite de un proceso ordinario laboral de primera instancia en nombre de RODOLFO ANTONIO



**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

QUINTERO CANEDO contra la UGPP, no obstante, en el poder otorgado al profesional del derecho, Dr. Luis Ernesto Heras Ramos, no se le faculta para iniciar dicho trámite dado que fue conferido para solicitar medidas cautelares tendientes a obtener la revocatoria de un acto administrativo ante los Magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, por lo que tratándose de un poder especial, amplio y suficiente, el artículo 74 del C.G.P aplicable por integración normativa en materia laboral (Art.145 CPTSS), exige que en el mismo se determine claramente los asuntos, de tal modo que no puedan confundirse con otros, y nótese que en este caso dicho poder no enuncia el trámite que debe adoptarse, que sería el de un proceso ordinario laboral de primera instancia, lo que se traduce en insuficiencia del poder otorgado como anexo del libelo progenitor. Por lo tanto, la parte actora deberá corregir el poder conferido el cual deberá expresamente el trámite para el cual se otorga y todos los asuntos pretendidos, a efectos que no sea insuficiente, así como también el correo electrónico del apoderado judicial, tal como lo dispone el artículo 5 de la Ley 2213 de 2.022, subsanando los yerros anotados.

En ese orden de ideas como la demanda debe adaptarse tanto en forma como en contenido al proceso ordinario laboral, el escrito presentado además de no indicar la clase de proceso como se advirtió, evidencia como cuarta falencia que carece de razones y fundamentos de derecho, así como de estimación razonada de la cuantía, conforme a los numerales 8º y 10º del artículo 25 del CPTSS. Es de recordar, que las razones de derecho, son distintas a los fundamentos de derecho como tal, siendo que ambos se encuentran contemplados en el numeral 8º del artículo 25 del CPTSS, pues recuérdese, el fundamento de derecho es la invocación de la norma o texto legal aplicable al caso concreto, mientras que la razón de derecho es la explicación del por qué debe aplicarse el fundamento de derecho invocado a la situación fáctica planteada, resultando apropiado que la parte actora corrija y complemente la demanda en tal sentido.

Por último, como quinta falencia, se encuentra que algunos de los hechos no se encuentran individualizados, expresados con claridad y de manera concreta, como es el caso de los hechos 3, 4 y 5, que fueron redactados de tal forma que contienen más de una afirmación, evidenciando así una mengua al derecho a la defensa que le asiste a la parte demandada de pronunciarse sobre cada hecho, indicando cual admite, niega o no le consta, puesto que la demandada solo puede contestar el mismo con una de las respuestas posibles, so pena de tenerle el hecho como cierto, por lo que se hace necesario que se individualicen y se aclaren los hechos en que se sustentan las pretensiones que se demandan, debidamente enumerados y clasificados como lo ordena el numeral 7º del artículo 25 del C.P.T.S.S., para que la demandada pueda dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 31 ibidem, por lo tanto, debe corregirse en tal sentido.

Así las cosas, para los fines procesales es conveniente que, al momento de la subsanación, **se haga la presentación de la demanda subsanada junto con los anexos respectivos de manera íntegra, y no fragmentada, e igualmente se envíe copia de esta a la parte pasiva de la demanda y aporte constancia de tal envío** con arreglo al art.6 Dec.806/20 hoy Ley 2213 de 2.022.

Lo anterior hará que la demanda se devuelva por el término de cinco (5) días para que sea subsanada so pena de rechazo, conforme a los artículos 28 del C.P.T.S.S. y 90 del C.G.P. aplicable en materia laboral por remisión del artículo 145 del C.P.T.S.S. para que la demandante subsane los yerros anotados y descritos a la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por la Sala Plena de la Corte Constitucional en providencia del 14 de septiembre de 2.022, por medio de la cual dirimió el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Jurisdicción Ordinaria Laboral, en el sentido de: *“DECLARAR que su conocimiento corresponde al Juzgado 13 Laboral del Circuito de Barranquilla y debe reasumir la competencia del referido proceso (...)”*. En consecuencia, **AVÓQUESE** el conocimiento del presente proceso.

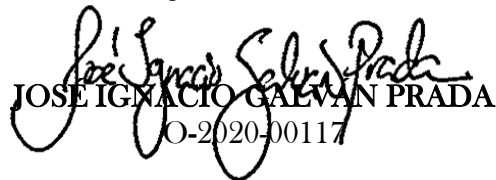
Consejo Superior de la Judicatura  
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico  
**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

**SEGUNDO: ADECÚESE** la presente demanda al trámite de un proceso ordinario laboral de primera instancia. Por consiguiente, **DEVUÉLVASE** la presente demanda promovida por RODOLFO ANTONIO QUINTERO CANEDO contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP, por el término de cinco (5) días para que subsane los yerros anotados anteriormente so pena de rechazo.

**TERCERO: ORDÉNESE** al demandante, hacer la presentación de la demanda subsanada y los anexos respectivos de manera íntegra y no fragmentada, e igualmente se envíe copia simultánea a la parte pasiva del proceso.

EL JUEZ,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
JOSE IGNACIO GALVAN PRADA  
O-2020-00117

Juzgado 13 Laboral Del Circuito de Barranquilla  
Día 06 Mes 07 Año 2023  
Notificado por el Estado N° 095  
La Providencia de fecha Día 30 Mes 06 Año 2023  
La Secretaria María Bernarda Potes Santodomingo